

¿Salida exclusivamente represiva?

- El Estado sospecha del sindicato pero no detienen a los charros, son sus socios.
- El gobierno de Calderón copia a Bush, en todo ven terroristas para justificarse.
- El gobierno refuerza la vigilancia en Pemex y a los órganos estatales de seguridad.

Linealidad de los discursos

A las nuevas explosiones de Pemex y la atribución al EPR se sucedieron una serie de declaraciones.

“Devuélvalos, y ya”, escribió O. Rodríguez (en *La Jornada* 13 sep 2007) y agregó “la bola ya no está en la cancha del EPR, sino en la del gobierno. Fácil. Si tiene a los dirigentes de este grupo guerrillero, que se los devuelva, de todos modos no ha podido combatirlo ni, por lo visto, no sabe dónde está ni cómo atacarlo, a pesar de que el grupo armado tiene, como EPR, más de 10 años de vida. Si le creemos a sus comunicados, las acciones de sabotaje serán suspendidas a partir de la liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. ¿No es mejor para el país devolver a dos guerrilleros que revivir la vieja *guerra sucia*?”. De veras, linealmente, se ve muy fácil, lástima que el movimiento sea no-lineal.

Mariano Saynez, secretario de marina de Calderón, “rechazó categóricamente las acusaciones del grupo armado de que sus actos violentos están relacionados con la desaparición de dos de sus compañeros a manos del gobierno. “Yo les puedo asegurar que eso no lo hicieron las autoridades estatales” y deslizó que “posiblemente ellos mismos los hayan desaparecido o algún otro grupo radical los tenga en otra parte” (Aranda J. en *La Jornada* 13 sep 2007). Muy primitivo, dijo que con los atentados “hay algunos grupos radicales que son financiados por quién sabe quién y que están buscando cierta desestabilización”.

El almirante comentó que “todas las líneas de investigación están abiertas”, incluida la posibilidad de que el causante de las explosiones –

nunca se refirió al EPR de manera concreta, pese a que éste reivindicó la autoría de los atentados– haya contado con la colaboración de integrantes del sindicato petrolero o funcionarios de Pemex; aunque minutos después señaló que él no creía “que el enemigo estuviera en casa”.

El almirante desliza acusaciones sin prueba al insistir en involucrar a los trabajadores, no al sindicato, petrolero. Si tienen dudas del sindicato deberían de inmediato a detener a los charros, el gobierno sabe bien quiénes son sus socios. ¿Por qué no lo hacen?

Para la PGR se trató de sabotajes

Pareciera chiste pero el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz exigió que quien o quienes tengan detenidos a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuya liberación demanda el Ejército Popular Revolucionario, “los presenten vivos”. Sabido es que Ulises es un gobernador represor y sobre el cual se presume la responsabilidad de haber detenido a los desaparecidos que reclama el EPR.

El 13 de septiembre, en la ciudad de México, Eduardo Medina, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) calificó a las explosiones en Pemex como de actos de sabotaje y terrorismo, y no actos de reivindicación política o social. Al siguiente día, en Monterrey Medina volvió a repetir el mismo discurso: “se trata de conductas delictivas y criminales que constituyen los delitos de terrorismo y sabotaje”, dijo. En el tono de Ulises, Medina dijo que “ninguna autoridad tiene detenidos a quien esta agrupación reclama”.

Según la misma PGR, los materiales utilizados en las recientes explosiones fueron similares a los usados en las anteriores. "Se habrían utilizado materiales conocidos como Anfo, Semtex y C-4, a los cuales se les agregó un reloj para determinar la hora en que debían estallar, y cuya pila actuara como detonador de las explosiones.

Según los reportes de la PGR, los materiales utilizados no son difíciles de conseguir, ya que en México se utilizan para actividades de minería o acciones de demolición" (Castillo G. en *La Jornada* 14 sep 2007).

Entretanto, en Oaxaca, familiares de uno de los detenidos que reclama el EPR denunciaron que elementos de la AFI de la PGR se dedicaban a hostigarlos. A un exguerrillero, Hermenegildo Torres, agentes federales lo detuvieron el 14 de septiembre en la ciudad de México; más tarde fue liberado. Lo que hizo el gobierno federal "es reiniciar la *guerra sucia*, que se suponía se había quedado atrás, en los años 70, para detener a quien se pueda, acusándolo de subversivo, por su incompetencia para investigar", declaró Felipe Martínez, exrector de la Universidad de Oaxaca. Aseguró que la redición de la *guerra sucia* es evidente no solamente con la detención de Torres Cruz sino también con las acusaciones sobre la existencia de células del EPR en Pemex. "El gobierno no hace más que aplicar los cánones de la *guerra sucia*; está acostumbrado a mentir, a levantar falsos y a encarcelar a gente inocente por no tener alternativas de investigación", dijo.

Los delincuentes están en el gobierno

El 14 de septiembre, el EPR respondió al procurador Medina a través de un nuevo comunicado (en *La Jornada* on line 14 sep 2007). "Hay quienes condenan y descalifican nuestro accionar de autodefensa colgándonos el epíteto de delincuentes y terroristas, pero callan y guardan silencio ante el terrorismo de Estado y el proceder de la ultraderecha, avalando en los hechos la reedición de la guerra sucia y la institucionalización del fascismo".

"Los únicos terroristas, los grandes delincuentes no están en el pueblo, en las filas de los revolucionarios", dice. "A dichos delincuentes y terroristas búsqenlos en las diferentes estructuras de este gobierno y en los cuerpos policiaco-militares, en el grupo de oligarcas que lucran con el país y que pugnan por la instauración de un Estado

2007 energía 7 (93) 11, FTE de México policiaco-militar; con esos fines impusieron a Calderón en un proceso electoral fraudulento", agrega el comunicado.

En un extenso documento señalan que "Es el gobierno de Felipe Calderón el responsable directo del desastre económico, político y social que vive el país. Él en persona y la cúpula gobernante conformada por políticos, militares, clérigos y oligarcas que lo apoyan son los responsables de que hoy asumamos una posición de autodefensa, porque es Calderón quien directamente ha dado la orden de reeditar las prácticas de la guerra sucia".

De acuerdo a la apreciación de J. Avilés (en *La Jornada* 15 sep 2007) "quienes diseñaron los supuestos atentados lo hicieron desde dentro de Pemex, lo que sólo agudiza las sospechas sobre la participación de las autoridades federales en una operación que le reporta al menos tres dividendos inmediatos: contribuye a elevar el precio del crudo en el mercado internacional, aumenta el deterioro físico de una empresa que la gente de Los Pinos tiene como misión privatizar y, lo más obvio, pretende generar temor para inhibir la movilización de un pueblo cada vez más indignado, lastimado y hambriento".

Si esto es así, ¿Quién o quienes fueron? ¿Fue el grupo de Reyes Heróles? ¿Hay acuerdo con los charros sindicales? Sabido es que, no obstante beneficiarse de la paraestatal, ambos son enemigos de Pemex.

Situación límite

Las explosiones son la primera acción militar de gran envergadura efectuada por el EPR en más de 10 años, escribió L. Hernández (en *La Jornada* 18 sep 2007). "Pero que no se realicen acciones bélicas ofensivas no significa que el EPR haya estado inactivo a lo largo de estos años. Se ha extendido más allá de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y las Huastecas. Ha participado en importantes luchas sociales. Mantiene una prensa escrita regular. En la antinomia entre lo político y lo militar, parecía haber privilegiado la lucha de masas sin renunciar a la lucha armada. Ni siquiera durante las recientes protestas en Oaxaca, donde tiene amplia presencia, efectuó acciones guerreras.

"Los atentados a Pemex cambian dramáticamente esta orientación. El EPR ha pasado ahora a poner el acento de su actuación en la realización de las acciones bélicas por sobre la lucha política. ¿Por qué lo hace?

2007 energía 7 (93) 12, FTE de México

“En el comunicado con fecha del 20 de junio, el EPR insiste en la vía política y previene: “la fuerza está en la prudencia, todo lo hemos resuelto privilegiando soluciones políticas, pero también el pueblo nos ha dado el derecho de la autodefensa, por lo tanto podríamos cambiar de táctica, y si en esta táctica de autodefensa la hacemos como tal es agotando la solución política y dando otro paso”.

“Pero nadie en el gobierno federal se dio por enterado de la gravedad de la situación. La dinámica de confrontación entre el campo del epperrismo y el gobierno federal existente hasta ese momento estaba a punto de transformarse, pero los servicios de seguridad del Estado hicieron caso omiso de las señales que la guerrilla envió.

“Los atentados han tenido un costo elevado para la organización armada. A pesar de asegurar que “en ningún momento hemos obstaculizado la lucha de masas, ni lo haremos pero también es el momento que nos permitan cambiar de táctica si así se requiere”, los ataques han precipitado su aislamiento de organizaciones de masas y han descarrilado la dinámica sobre la que habían crecido desde hace años. Por diferencias genuinas o por temor a la represión, dirigentes sociales se han deslindado de las explosiones. Los petardos colocados en Oaxaca profundizaron las diferencias con la dirección de la APPO. Así es que si el EPR se aventuró a seguir ese camino es porque el gobierno federal lo colocó en una situación límite. ¿Puede el gobierno mexicano darle al desafío una salida exclusivamente represiva? Parece evidente que no. Los *operativos* del Ejército y la policía para golpear al EPR han resultado infructuosos”.

Acciones para evitar más ataques

El 18 de septiembre, mediante un nuevo comunicado, el EPR advirtió que continuará con sus acciones político-militares hasta la aparición con vida de sus dos militantes, quienes “se encuentran secuestrados” y bajo tortura “en instalaciones del Campo Militar Número Uno” (en *La Jornada* 19 sep 2007). Destacó que al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, le corresponde decir a quiénes y en qué condiciones entregaron a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, porque “ahora sabemos que existe una grabación que corrobora su detención y entrega a las fuerzas federales”.

El EPR planteó también 11 acciones como única forma de evitar eventuales ataques contra instalaciones estratégicas, entre las que se encuentran la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada; la descriminalización de la lucha social; el fin de la impunidad, y la suspensión de la política neoliberal. También está la petición de liberar inmediatamente a todos los “presos políticos y de conciencia” del país, la suspensión de hostigamientos contra defensores de derechos humanos y la desmilitarización, así como el desmantelamiento de los grupos paramilitares con los cuales se desarrolla la “guerra sucia”.

En el comunicado el grupo armado “Consideró demagógico afirmar que “destruimos el patrimonio que tanto le ha costado a los mexicanos”, cuando esa riqueza se encuentra en manos de los monopolios nacionales y trasnacionales de manera encubierta con los famosos Pidiregas. A los que insinúan que las acciones de autodefensa del EPR podrían provocar la privatización de la paraestatal, el grupo guerrillero les dijo que es lamentable que teniendo una conciencia de lucha contra la injusticia se equivoquen concretamente en ese punto”.

Bueno, la política se comprueba en la práctica. Por legítimas que sean las demandas que exigen la libertad de dos detenidos-desaparecidos, el gobierno está haciendo un manejo político de las explosiones en los ductos de Pemex y lo que pretende es la privatización no solamente de los ductos sino de toda la industria petrolera. Al tiempo.

“A quienes menosprecian nuestra capacidad les decimos que no estamos manejados por la CIA ni por Al Qaeda ni somos parte de los grupos de poder que están dentro del Estado”, concluye. Esta explicación no explica nada, al contrario, confunde más. Por lo menos, no es la manera de explicarlo y confunde habida cuenta que el Estado tiene “redactores” especializados en tergiversar todo.

Diputado del PAN propone formar una comisión

El 19 de septiembre, la comisión de seguridad pública del Senado planteó la integración de una comisión que pueda “ser la llave para abrir la puerta a una mesa de diálogo, donde las justas demandas” del Ejército Popular Revolucionario (EPR) puedan ser conocidas y atendidas, dijo Ulises Ramírez,

diputado del PAN (Castillo G., en *La Jornada* 20 sep 2007).

Esa loable propuesta suena extraña, sobretodo viniendo de un senador panista. Más extraño, y plausible, fue lo señalado por el legislador. Este dijo que la intención de la propuesta es que la comisión lleve a una mesa de diálogo, en la cual las exigencias del EPR “puedan ser conocidas en el ámbito legislativo, y este poder sea el vehículo, la vía, para que ese grupo, pueda sentarse a dialogar y sea capaz de construir acuerdos”. Agregó que la propuesta es que el “Legislativo busque y dé respuesta a las demandas que han solicitado de manera contundente, y en forma específica se investigue el paradero de dos militantes del EPR” desaparecidos.

Este planteamiento es el más cuerdo que se ha presentado en una instancia del Estado hasta ahora errático, cerrado e incapaz de conceptualizar al EPR. Desafortunadamente, no ha pasado de ser un buen deseo. El poder legislativo en su conjunto tiene otra agenda y no le interesa participar de las soluciones nacionales.

Vigilancia aérea en Pemex

El 20 de septiembre, Rosendo Villarreal, director corporativo de Pemex, informó que para evitar que la infraestructura petrolera fuera sea blanco de “nuevos ataques”, la paraestatal comenzó a “instalar un sistema de vigilancia y detección de explosivos a distancia” (Gómez C., en *La Jornada* 21 sep 2007). En ese dispositivo aéreo para la detección de explosivos se ha instalado un equipo que puede realizar tareas de vigilancia desde helicópteros.

Al mismo tiempo se reforzó la vigilancia terrestre. “Hemos reforzado las medidas de seguridad en todo el territorio, en todos los ductos, con celajes aéreos, con el equipo más sofisticado, pero también con celajes terrestres, para lo cual trabajamos en coordinación con organismos de seguridad del país”, explicó.

Con esas medidas, el amedrentamiento a los petroleros es cada vez mayor. Reiteramos que trabajadores están secuestrados en su propia organización sindical desde hace décadas. También están secuestrados en los centros de trabajo petroleros, en tierra y en mar. Ahora, además, están continuamente vigilados por la policía y Ejército. El objetivo es simple: el Estado los mantiene al margen, paralizados, mientras sigue adelante con sus planes privatizadores.

El Estado refuerza a sus cuerpos de seguridad

En Jiutepec, Morelos, el Procurador General de la República volvió a referirse a las explosiones como “los actos de terrorismo y sabotaje recientemente perpetrados contra el pueblo”

Al anunciar la formación del nuevo Frente Nacional contra la Represión (FNCR), la señora Rosario Ibarra informó que en 7 años de gobiernos del PAN ha habido 100 desapariciones forzadas, de las cuales 65 ocurrieron con el foxismo y 30 con el actual gobierno.

Luego de un amparo promovido por los familiares de Edmundo Reyes Amaya, uno de los detenidos-desaparecidos que reclama el EPR, obtuvieron una resolución favorable del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo a esa resolución, se pide “al presidente Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a otras instancias gubernamentales presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya, uno de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo pasado” (Vélez O., en *La Jornada* 25 sep 2007).

El 25 de septiembre, Francisco Ramírez cuña, secretario de gobernación, “dio a conocer la operación del Grupo Central de Atención a la Subversión, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ramírez dijo que dicho grupo está “trabajando de manera ordenada, coordinada con la PGR, para poder dar con los responsables” (de los atentados a ductos de Pemex).

El “sistema contribuye al combate frontal contra la delincuencia a través de la concentración de información, lo que nos permite tener análisis de inteligencia, organizaciones delictivas y fichas criminales de todos”, dijo. Así, el Estado ha aprovechado muy bien las explosiones en Pemex para reforzar todo su aparato de contrainsurgencia.

Involucran al Comando Jaramillista

El 27 de septiembre se informó que el Grupo Nacional contra la Subversión atribuyó las explosiones en Pemex al Comando Jaramillista.

2007 energía 7 (93) 14, FTE de México

“Según las fuentes consultadas, los peritajes han dado cuenta de que los artefactos que se colocaron en instalaciones de Pemex contienen las mismas sustancias, sólo que en mayores cantidades, que los empleados en los ataques a sucursales bancarias en Morelos en mayo de 2006, atribuidos al comando jaramillista” (Castillo G. en *La Jornada* 27 sep 2007).

Esas apreciaciones parecen improvisadas. Da la impresión que el gobierno federal no sabe qué está pasando o, bien, deliberadamente hace más borrosa la información.

En Chilpancingo, cuatro organizaciones guerrilleras escindidas del EPR exigieron al gobierno presentar a los dos militantes del EPR desaparecidos (Ocampo S. en *La Jornada* 29 dic 2007). Los firmantes son: Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), la Organización

Insurgente-1º de Mayo (OI-1º M), y la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre (BA-2D).

En un comunicado las organizaciones firmantes hicieron un llamado al pueblo de México “a superar la dispersión que priva entre las fuerzas de izquierda, a seguir impulsando la construcción del poder popular y a intensificar la lucha por recuperar y reconstruir una patria libre y justa para todos, con base en la reconstrucción –justa y recta– de la visión teórica y la actividad-práctica-transformadora de la izquierda mexicana; de manera particular, llamamos a los sectores honestos –y personalidades íntegras de la izquierda institucional a hacer del ejercicio parlamentario y extraparlamentario no la actividad exclusiva y excluyente a la que la han reducido las prácticas supuestamente maduras y modernas”

Al momento, no se ven siquiera intenciones del gobierno federal por una salida política democrática. No es su estilo ni su interés.



Humo en Veracruz después de las explosiones